



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, agosto 29 de 2022

AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	INGENIO MARÍA LUISA SA Correo: mposada@pgpabogados.co
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP Correo: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
RADICACIÓN:	76001-23-33-000-2019-00437-00

ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE Y MEMORIALES.

En aras del cumplimiento del artículo 46¹ de la Ley 2080 de 2021 que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, las partes cuentan con los documentos necesarios para formular sus alegaciones en la medida en que fueron notificados de todas las actuaciones surtidas en el proceso y se surtieron los correspondientes traslados.

La **Ley 2080 del 2021**, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El **expediente físico** fue digitalizado y puede consultarse en el repositorio **MERCURIO**, previa solicitud de acceso al siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU> . En el siguiente link encontrará un video tutorial para el ingreso: <https://bit.ly/3BQHMIh>.

¹ Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtir en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y SIIS apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, ; formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: INGENIO MARIA LUISA SA
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2019-00437-00

El **expediente digital** está en la sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **"CONSULTA DE PROCESOS"** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán **RADICAR MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es el canal oficial para recibir memoriales** a partir del **16 de mayo de 2022**.

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo "Solicitudes y otros servicios en línea", dar clic en "Acceso a expedientes" aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo "Solicitudes y otros servicios en línea", dar clic en "Memoriales y/o Escritos", aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso **y cargar los archivos con destino al proceso** en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

I. ASUNTO PARA DECIDIR:

1.1. El Consejo de Estado – Sala Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, C.P. JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, en providencia del 17 de septiembre de 2020, resolvió dirimir el conflicto de competencias, en el sentido que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es el competente para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad Ingenio María Luisa S.A. Conforme con lo anterior, en la parte resolutoria de esta providencia se dispondrá obedecer y cumplir lo anterior y se procederá a continuar con la etapa procesal pertinente.

II. ANTECEDENTES

2.1. En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la sociedad INGENIO MARIA LUISA SA, solicita se declare la nulidad de la liquidación oficial No. RDD-2015-01114 del 28 de diciembre de 2015, por no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la Protección Social por los periodos enero y diciembre de 2013 y se sanciona por inexactitud por los mismos periodos, proferida por la UGPP, y la Resolución No. RDC 892 del 23 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso de

reconsideración contra el precitado acto administrativo. Como restablecimiento del derecho solicita se declare que la sociedad demandante no adeuda pago alguno por concepto de aportes al sistema de Protección Social y/o sanción por inexactitud a la UGPP por los periodos de enero a diciembre de 2013.

III. LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS

3.1.La entidad demandada no formuló excepciones.

IV. FIJACIÓN DEL LITIGIO

4.1.La controversia jurídica se circunscribe en determinar si los actos administrativos demandados, se encuentra ajustados o no a derecho, toda vez que, en criterio de la parte demandante, los mismos incurrieron en infracción de las normas en la que debía fundarse, violación al principio de certeza tributaria derivado del principio de legalidad del tributo y al derecho de defensa y audiencia, encontrarse incursos en vicios sobre su competencia y objeto y en razón a la falta de exoneración de la sanción por inexactitud contemplada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, ya que no existe inexactitud en dichas declaraciones, como quiera que se realizaron los pagos de los aportes al sistema de protección social en los periodos de enero a diciembre de 2013 de forma oportuna y completa. En caso que no se encuentren ajustados a Derecho, se deberá establecer si es procedente el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda.

V.DE LAS PRUEBAS

5.1.Resuelto lo anterior, se decretará la práctica de las pruebas que fueren pertinentes, y en caso de no encontrarse necesarias, se procederá en los términos previstos en 42 de la Ley 2080 de 2021 a proferir sentencia anticipada por escrito.

5.2.PRUEBAS PARTE DEMANDANTE:

5.2.1. Visible a folios 217-228, la parte demandante solicitó el decreto de pruebas documentales allegadas con la demanda. Frente a lo anterior, la parte demandada se opuso a las siguientes:

5.2.1.1. Frente a los cuadros Excel, indicó que los considera impertinentes por cuanto no demuestran el cumplimiento correcto, adecuado y oportuno de las obligaciones frente al sistema de protección social.

5.2.1.2.Respecto a los desprendibles de nómina y pila, adujo que, fueron valorados con ocasión del proceso de determinación y fiscalización, lo que se evidencia con las respuestas en la columna BF denominada "respuesta a demanda: glosa: persiste ajuste, registró pago de aportes por valor inferior, no cotiza sobre la totalidad de los pagos salariales de acuerdo con lo registrado en nómina".

5.2.1.3.En relación con los contratos de trabajo, indicó que fueron valorados íntegramente y solicitó solo valorar las pruebas contractuales aportadas a la

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: INGENIO MARIA LUISA SA
DEMANDADO: UGPP
RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2019-00437-00

entidad y que obran en el cd de antecedentes administrativos. Relacionó los contratos que se allegaron con la demanda pero no en actuación administrativa.

5.2.1.4. Finalmente, frente a la política de trabajo suplementario indicó que es impertinente e inútil, toda vez que los actos demandados obedecen al año 2013 y la aportada es de 2015. En similar argumento solicitó denegar como prueba documental el Acuerdo 1035 de 2015.

5.2.1.5. Para resolver, el Despacho tendrán como pruebas en su alcance legal, los documentos allegados con la demanda, visibles a folios 1 a 104 y 129-232 del expediente físico.

5.2.1.6. Lo anterior, en razón a que los argumentos que brinda la parte demandada para negar las pruebas documentales no tienen relación con la pertinencia o conducencia de la prueba, ya que las inconformidades que indica radican es en la aplicación de criterios de valoración probatoria, lo cual no resulta pertinente en esta etapa procesal.

5.2.1.7. Por otra parte, frente a las pruebas allegadas en sede judicial y no valoradas en la actuación administrativa, se recuerda que, no existe impedimento para apreciar pruebas diferentes a las analizadas por la administración, siempre que se alleguen en las oportunidades previstas para tal fin, según lo previsto en los incisos 1º a 3º del artículo 212 del CPACA. Lo anterior, ha sido recordado por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, C.P Milton Chaves García, en sentencia 3 de marzo de 2022, exp 25000-23-37-000-2017-00501-01 (25208), en el cual se debatía el monto de los aportes para el Sistema de Seguridad Social, donde se explicó:

“En el presente asunto, la demandante allegó en esta instancia judicial otrosíes que acreditaban la connotación no salarial de la bonificación por desempeño, frente a los cuales la UGPP se opuso a su valoración, por cuanto los mismos no fueron aportados en sede administrativa y reconocerlos en esta instancia quebranta su debido proceso.

*Al respecto, esta Sección ha considerado que la parte demandante puede atacar la presunción de legalidad de los actos demandados con nuevas pruebas o mejorar las aportadas en la actuación administrativa. **No existe impedimento para apreciar pruebas diferentes a las analizadas por la administración, siempre que se alleguen en las oportunidades previstas para tal fin, según lo previsto en los incisos 1º a 3º del artículo 212 del CPACA.***

En efecto, en sentencia de 29 de agosto de 2019, se reiteraron varios pronunciamientos de la Sala en los que se indicó que a pesar de lo dispuesto en el artículo 744 del ET, esto no impide que el contribuyente, con ocasión de la demanda y demás oportunidades procesales antes descritas, allegue nuevas pruebas o mejore las aportadas en la vía administrativa, dado que el proceso ante la jurisdicción contenciosa otorga a las partes libertad probatoria para demostrar los hechos que constituyen sus afirmaciones.” – Resaltado por la Sala -

5.2.2. En cuanto a las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante (folios 228-230), se negarán, toda vez que para probar la práctica laboral y contable de la empresa, así como el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social, se cuenta con la documentación allegada tanto con la demanda, como en los antecedentes administrativos

y lo regulado por las normas legales para ello, con lo cual se determina las actuaciones objetivas que fijaran los procesos correctos aplicables y por tanto el relato que puedan realizar los testigos sobre los mismos no tendrá incidencia en aspectos ya determinados por la Ley, aunado a que conforme con la fijación del litigio el presente asunto versa sobre aspectos de pleno derecho.

5.2.3. Respecto de las pruebas solicitadas a folio 230, denominadas "PRUEBAS POR OFICIO", en la que se solicita oficiar HARINERA DEL VALLE, para que allegue el contrato que certifica la práctica contable de la empresa en la liquidación de la nómina y los desprendibles de nómina y PILA, la misma se negará, en razón a que de conformidad con los artículos 211 y 212 del CPACA, lo que no esté expresamente regulado en materia probatoria, se aplicarán las normas del Código General del Proceso y de acuerdo con éste no se cumple en este asunto los requisitos para hacer uso del poder de ordenación e instrucción que tiene el Juez.

5.2.3.1. Lo anterior en razón a que, por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable el Código General del Proceso en los aspectos no regulados; es así como, frente a los poderes de ordenación e instrucción del juez, el artículo 43 del CGP, indica que se tendrá el poder de ordenación e instrucción, entre otros, para exigir a las autoridades o a los particulares **la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso;** dicho dispositivo normativo se interpreta en consonancia con el artículo 78 numeral 10, el cual establece como deber de las partes y sus apoderados, **el abstenerse de solicitar la consecución de documentos que directamente o por intermedio del ejercicio de derecho de petición hubiere podido conseguir;** así como, con el artículo 173 inciso 2 ibidem, el cual indica que, **el juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que, se hubieren podido conseguir a través del derecho de petición, salvo cuando la petición no hubiere sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.**

5.2.3.2. Como se puede observar, el ordenamiento jurídico otorga el poder de ordenación al juez en los casos en los que la parte o sus apoderados hayan solicitado alguna prueba o documento y la misma le hubiese sido negada, así lo expresan los artículos 43, 78 y 173 del CGP.

5.2.3.3. En el presente asunto, la parte demandante realiza la solicitud de oficiar, sin indicar razón alguna que se hubiere negado la consecución de dichos documentos, aunado a que no obra prueba de respuesta negativa por parte de la entidad, por lo que, al no acreditarse sumariamente dicha circunstancia, es deber del juez abstenerse de ordenar la práctica de dicha prueba.

5.3.PRUEBAS PARTE DEMANDADA

5.3.1. Se tendrán como pruebas en su alcance legal, los documentos allegados con la contestación de la demanda, visibles a folios 264-318 del expediente físico.

VI. SENTENCIA ANTICIPADA:

6.1.El artículo 42 de Ley 2080 de enero 25 de 2021² adicionó un artículo a la Ley 1437 de 2011 del siguiente tenor:

“Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

“1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho

b) Cuando no haya que practicar pruebas

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código (...).”

6.2.Con fundamento en lo anterior, se puede concluir que la posibilidad de emitir sentencia anticipada se encuentra contemplada a los siguientes supuestos: (i) antes de la audiencia inicial, (ii) en cualquier estado del proceso cuando se presente petición en ese sentido de las partes, (iii) cuando el juez lo estime de oficio dada la existencia de una de las excepciones que se enlista en el numeral 3, y (iii) cuando surja de manifestación de allanamiento o transacción.

6.3.Así pues, el presente asunto se ubica en el primer escenario, esto es antes de la audiencia inicial, más concretamente al constituirse la hipótesis contemplada en los literales a), c) y d) del aludido numeral 1 ibidem, anteriormente descritas y en tal evento se evidencia la procedencia de la figura de la sentencia anticipada.

VII. TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN

7.1. Finalmente, como quiera que únicamente se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda y su contestación, se correrá traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de diez (10) días para alegar de conclusión por escrito, con la finalidad de dictar sentencia anticipada de la misma forma.

En consecuencia; se,

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	INGENIO MARIA LUISA SA
DEMANDADO	UGPP
RADICACIÓN:	76001-23-33-000-2019-00437-00

RESUELVE:

PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR, lo ordenado por el Consejo de Estado – Sala Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, C.P. JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, en providencia del 17 de septiembre de 2020, en la que resolvió dirimir el conflicto de competencias, en el sentido que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es el competente para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad Ingenio María Luisa S.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: PRESCINDIR de la audiencia inicial en los términos del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, por las razones expuestas en este proveído.

TERCERO: FIJAR el litigio de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: INCORPORAR como pruebas los documentos allegados con la demanda, su reforma y la contestación.

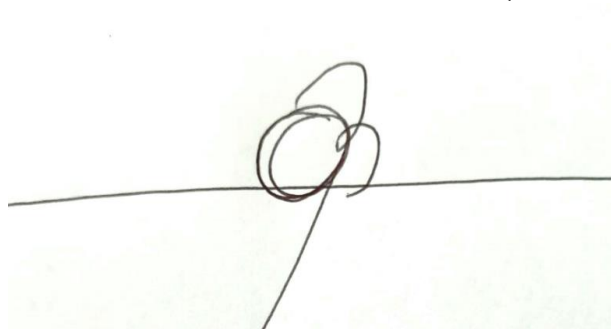
QUINTO: NEGAR la prueba testimonial y por oficios solicitada por la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Dar aplicación a la figura procesal de la sentencia anticipada dispuesta en el artículo, 182A del CPACA, adicionado por el art. 42 de la Ley 2080 de 2021.

SÉPTIMO: CORRER traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de diez (10) días para alegar de conclusión por escrito, con la finalidad de dictar sentencia anticipada de la misma forma².

OCTAVO: EXHORTAR a la Secretaría del Tribunal para que agilice el impulso y sustanciación de este tipo de actuaciones, dado que el expediente regresó del Consejo de Estado en el año 2020, y sólo hasta ahora fue pasado a Despacho por la Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

² Proyecto Ipqo